

Rodríguez, Laura Graciela (2011). *Católicos, nacionalistas y políticas educativas en la última dictadura (1976–1983)*. Rosario: Prohistoria.

127 páginas.

Por María Florencia Osuna

Universidad Nacional de General Sarmiento – CONICET, Argentina

florenciaosuna@gmail.com

Recibido: 16|02|2012 · Aceptado: 20|02|2012

En *Católicos, nacionalistas y políticas educativas en la última dictadura (1976–1983)*, la historiadora Laura Graciela Rodríguez analiza las principales políticas impulsadas por el Ministerio de Cultura y Educación en el período 1976–1983. La autora reconstruye el origen y el derrotero de las políticas estudiadas, teniendo en cuenta las trayectorias profesionales de los principales funcionarios de la cartera, y el contenido y la implementación de las políticas más relevantes destinadas a los niveles primario y secundario, y al área de cultura.

Laura Rodríguez ha publicado numerosos artículos sobre las políticas educativas y culturales de la última dictadura, y este libro condensa y sistematiza el importante trabajo de investigación que la autora viene realizando. Esta obra, además de profundizar en un problema que en general se ha estudiado de manera escasa y fragmentaria, construye y propone un enfoque novedoso para pensar las políticas estatales durante la dictadura.

A lo largo de los capítulos se advierte la intención de la autora de evitar pensar la política educativa de la dictadura como un todo coherente y homogéneo. En este sentido, en el libro encontramos una compleja reconstrucción de la «arena de conflictos» donde se desarrollaban las políticas: diversos actores estatales

y civiles, distintos proyectos y posiciones. La mirada adoptada le permite cuestionar «una imagen de sentido común que supone que todo lo que propuso el poder cívico militar o la Iglesia en materia educativa, se concretó ampliamente» (p. 25).

Si bien se tiene en cuenta el carácter católico preconiliar de los funcionarios y su impacto en diversas iniciativas del área educativa, también se atiende a otras variables necesarias para explicar un conjunto de políticas vinculadas con el disciplinamiento y la represión. A partir del análisis que realiza la autora sobre la conformación de la agenda del Ministerio de Cultura y Educación se puede observar que, junto al ideario católico conservador, estuvieron presentes los principales objetivos de la última dictadura militar, principalmente, la aniquilación del «enemigo subversivo».

Otra de las dimensiones que atraviesa el conjunto de los capítulos del libro y que otorga una particular riqueza al análisis es el diálogo permanente que se establece entre la última dictadura militar y la denominada «Revolución argentina» (1966–1973). De esta manera, es posible advertir que en el período 1976–1983 no sólo reaparecieron muchos funcionarios de la dictadura anterior, sino que también se intentaron reactivar muchas de las propuestas que habían sido desarrolladas en ese

contexto. Por ejemplo, al analizar los proyectos para el área educativa de la última dictadura, la autora encuentra similitudes con los propósitos de un anteproyecto de Ley Orgánica de Educación, aprobado en 1968, propuesto por el ministro de Educación de Juan Carlos Onganía, José Mariano Astigueta. En esta reforma educativa, con un sesgo católico y elitista, se proponía la derogación de la Ley Nacional de Educación 1420 y la conformación de un «nivel intermedio» que tenía como objetivo otorgar a los alumnos algunos rudimentos prácticos para insertarse en el mercado laboral. La reconstrucción histórica que realiza la autora revela que estos proyectos resurgieron en el período 1976–1983.

Con respecto a los funcionarios del Ministerio de Cultura y Educación, la autora afirma que, si bien en su mayoría eran «católicos conservadores», también existía un grupo más reducido de «católicos nacionalistas» que, a diferencia de los primeros, eran claramente antisemitas. Para reconstruir las trayectorias profesionales, el ideario y las relaciones con las instituciones católicas de estos funcionarios, Laura Rodríguez analiza distintas revistas donde escribían los «conservadores» (*Revista del Consudec*), los «nacionalistas» (*Cabildo*, *Verbo*, *Mikael*) y ambos sectores (*Estrada*, *Revista del Instituto de Investigaciones Educativas*). En el corpus documental utilizado para analizar las diversas iniciativas políticas y su implementación encontramos distintos periódicos de tirada nacional (*Clarín*, *La Nación*, *La Opinión*, *La prensa*) y local (*El Día*), la legislación (decretos y resoluciones ministeriales) y la documentación producida por el Ministerio de Cultura y Educación, y por el Consejo Federal de Cultura y Educación.

La hipótesis que se intenta demostrar en el

trabajo es que varias de las medidas centrales de la cartera de Cultura y Educación que fueron reiteradamente anunciadas nunca se concretaron. Los diferentes capítulos del libro recorren cronológicamente las iniciativas ensayadas por parte de los diferentes ministros que se sucedieron a lo largo del período 1976–1983: Cesar Augusto Guzzetti (1976), Ricardo Pedro Bruera (1976–1977), Albano Eduardo Harguindeguy (1977), Juan José Catalán (1977–1978), Albano Eduardo Harguindeguy (1978), Juan Rafael Llerena Amadeo (1978–1981), Carlos Burundarena (1981) y Cayetano Licciardo (1981–1983).

En el primer capítulo, se da cuenta de las principales gestiones realizadas desde el Ministerio de Cultura y Educación por el contraalmirante César Augusto Guzzetti apenas iniciada la dictadura y, luego, por Ricardo Pedro Bruera desde que asumió como ministro a finales de marzo de 1976. Además de la división tripartita del poder entre las distintas Armas, con Guzzetti comenzó el accionar represivo que afectó a estudiantes y docentes. Luego, en el capítulo se analizan las principales políticas desarrolladas por el ministro Bruera. Por un lado, reinauguró el Consejo Federal de Educación que durante la «Revolución Argentina» había tenido como propósito transferir los servicios nacionales a las jurisdicciones (provincias, municipios). Nuevamente, a partir de 1976, el discurso ministerial apuntó en contra de la «centralización» y la «burocratización», y a favor de la descentralización educativa. Por otro lado, aunque sólo se logró implementar la educación católica en las escuelas de Santiago del Estero, en algunas materias del nivel primario y secundario de todas las instituciones del país se incorporaron tópicos católicos y otros de

carácter nacionalista (ligados, por ejemplo, a la defensa de la «soberanía argentina»). En esta parte del libro, también se analizan las estrategias represivas contra docentes y estudiantes que, por ejemplo, se materializaron en el llamado Operativo «Claridad» instrumentado por el presidente de facto Jorge Rafael Videla, en la creación de «listas negras», en la prohibición de libros y autores, o en la intervención de escuelas públicas y privadas.

En el segundo capítulo, se da cuenta del conflicto entre la Armada y el Ejército, contexto en el que renuncia el ministro Bruera. Luego, se analizan las principales características de la gestión de su sucesor, el ministro Juan José Catalán, militante católico proveniente del «grupo Perriau». Por un lado, en el año 1978, se llevó a cabo el proceso de transferencia de escuelas primarias nacionales a las jurisdicciones. Esta política, al igual que la defensa de la instauración de modalidades relacionadas con la «escuela intermedia», evidenciaba la vigencia de los proyectos político-ideológicos de los 60. La autora demuestra claramente —y éste es un importante aporte de su trabajo— que estas continuidades estaban en gran medida relacionadas con la existencia de elencos ministeriales similares a los de la «Revolución Argentina». Por otro lado, en este capítulo se analizan las políticas vinculadas a las estrategias represivas que se llevaron a cabo durante la gestión de Catalán, entre las cuales se encuentra la publicación y distribución del documento «Subversión en el ámbito educativo. Conozcamos a nuestro enemigo», que en consonancia con los objetivos de la dictadura, buscaba infundir el terror y el disciplinamiento en el sistema educativo. Según la autora, estas ideas constituían la base ideológica de la política educativa e implicaron la prohibición de

libros, la suspensión del Estatuto docente, y la represión a docentes, estudiantes y gremialistas. En este marco es posible inscribir el secuestro de Alfredo Bravo, dirigente de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina. Con respecto a las políticas del área de Cultura, en tiempos del mundial de Fútbol de 1978, aumentó el presupuesto con el fin de mejorar la imagen del país y contrarrestar la llamada «Campaña Antiargentina»; aunque los recursos también fueron utilizados para reforzar las temáticas nacionalistas y xenófobas sobre la «frontera». A pesar de la concreción de estas políticas, el ministro Catalán se vio obligado a presentar su renuncia a Videla luego de una discusión pública que tuvo con el rector de la Universidad de Buenos Aires.

En el tercer capítulo, se analizan las políticas del ministerio a partir de la asunción de Juan Rafael Llerena Amadeo, en noviembre de 1978. De acuerdo con la autora, fue el ministro que mejor cumplió con las expectativas de los sectores católicos. Por un lado, logró reformar los contenidos de los primeros años de la secundaria imprimiéndoles el sentido elitista y nacionalista que mencionamos anteriormente. Por ejemplo, con la incorporación de la asignatura «Educación Práctica», se comenzó a introducir uno de los propósitos de la «escuela intermedia» de preparar a los alumnos para el mercado laboral. También se reforzaron los contenidos hispanistas, nacionalistas y xenofóbicos, fuertemente vinculados con el problema de la «soberanía territorial», el problema de la frontera y las migraciones desde los países limítrofes. En este marco, por otro lado, el ministerio impulsó el operativo «Argentinos! Marchemos a las fronteras!», que implicó que miles de alumnos de escuelas secundarias de

la Capital Federal y de la provincia de Buenos Aires viajaran a las distintas zonas de frontera del país. A su vez, Harguindeguy apoyó la creación de la Gendarmería infantil conformada por miles de niños que vivían en esas áreas.

En el cuarto capítulo, la autora reconstruye y analiza en detalle las posiciones de los católicos nacionalistas acerca del contenido y el sentido religioso, antimoderno y anticientífico que para este grupo debían tener las distintas asignaturas escolares. Sin embargo, debido a que estas posiciones colisionaban con otras posturas dentro del Consejo Federal, en diciembre de 1978, se resolvió que cada jurisdicción adoptaría el enfoque que prefiriera. Aún así, la materia Formación Moral y Cívica, que se introdujo como materia obligatoria en 1979, tendría contenidos claramente católicos. Esto produjo una gran oposición por parte de diversos grupos políticos, sociales y religiosos, que llevaron al ministro a revisar los contenidos de la materia. Durante la gestión de Llerena Amadeo se anunció un anteproyecto de Ley de Educación, redactado por un grupo de católicos militantes que también habían sido funcionarios de la dictadura anterior, que introducía como posibilidad la «Formación religiosa» para todos los niveles de enseñanza y volvía a insistir en la incorporación del «nivel intermedio». Esta ley fue defendida, como en otras oportunidades, por la prensa católica. Si bien Llerena Amadeo consiguió avanzar parcialmente en el desarrollo de las iniciativas que mencionamos anteriormente, no logró la aprobación ni del nuevo Estatuto docente ni de la nueva Ley de Educación.

En el quinto capítulo, la autora analiza lo acontecido en los últimos años de la dictadura (1981–1983). Luego de la sanción de la Ley universitaria de 1980, que implicó el arance-

lamiento de los estudios de grado, se comenzaron a oír las críticas de diversos sectores. Debido a este clima y a los problemas presupuestarios que sufría la cartera, el ministro Llerena Amadeo presentó su renuncia. Los últimos ministros de la dictadura fueron Carlos Burundarena y Cayetano Licciardo. Estos funcionarios defenderían, al igual que los ministros anteriores, la incorporación del «nivel intermedio», la creación de una nueva Ley de Educación y de otro Estatuto Docente. Si bien durante la guerra de Malvinas la actividad ministerial se recompuso momentáneamente, en un contexto de creciente distensión política y de aumento de la oposición y de las críticas, los últimos ministros no tuvieron demasiado margen de acción para la implementación de sus proyectos.

A partir de lo expuesto, podemos afirmar que, desde el estudio de un conjunto de políticas y funcionarios pertenecientes a una agencia estatal en particular, el trabajo de Laura Rodríguez realiza un aporte valioso al campo de estudios sobre la dictadura y también nos brinda nuevas preguntas y perspectivas de análisis para seguir nutriendo la agenda de investigación sobre el pasado reciente argentino.

Por un lado, su trabajo nos invita a pensar las políticas de la última dictadura en un lapso temporal más amplio, fundamentalmente, a preguntarnos cuáles eran las políticas y quiénes eran los funcionarios de la dictadura anterior (1966–1973). En relación con esto, el libro nos permite dimensionar la importancia que tienen las trayectorias profesionales de los funcionarios para comprender muchas de las políticas que se llevaron a cabo. Pero también, por otro lado, nos advierte de la dimensión conflictiva de la burocracia estatal y de las diversas ideas, objetivos, proyectos y obstáculos que

configuraron las políticas. Este enfoque nos permite comprender la dificultad del gobierno dictatorial para implementar muchos de sus proyectos. En este sentido, como vimos, en este trabajo se busca cuestionar la imagen de una dictadura monolítica e infalible.

En el libro también encontramos nuevas preguntas y propuestas para continuar estudiando esta problemática que se aborda. Por un lado, propone tener en cuenta la dimensión internacional: profundizar la comparación con otras experiencias represivas como

el fascismo y el franquismo, y reconstruir las relaciones concretas que estableció el gobierno dictatorial argentino con ideas y figuras políticas, intelectuales y religiosas ligadas, por ejemplo, al régimen liderado por Francisco Franco. En tanto, la autora considera necesaria la realización de nuevos estudios de caso que aborden lo acontecido en el nivel local y en las diversas jurisdicciones para seguir complejizando nuestra mirada sobre las políticas educativas y culturales de la última dictadura militar argentina.